

Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Marcelo Freyhoffer Moya, abogado, en representación convencional del Servicio de Impuestos Internos, quien interpone Reclamo de Ilegalidad del artículo 28 de la Ley N°20.285 en contra la decisión de Amparo C13580-23, pronunciada por el Consejo para la Transparencia en su sesión ordinaria Nro. 1448, de 24 de junio de 2024 que, por acogió por unanimidad la petición de Haydee Cifuentes Cifuentes, y dispuso la entrega de la información solicitada, en los siguientes términos: *Acerca de Cristian Soto Torres (Grandes Contribuyentes): 1.- Copia de su última liquidación de remuneraciones. 2.- Copia de su última evaluación funcionaria. 3.- Copia de su hoja de vida funcionaria. Lo anterior, previa reserva o censura de toda aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados los funcionarios, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que allí conste. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.* Requiere el Servicio de Impuestos Internos se acoja el reclamo y, consecuentemente, revoque el acuerdo adoptado por dicho Consejo, estableciendo, en definitiva, que se rechace el amparo interpuesto por el peticionario.

La solicitud efectuada en su oportunidad al referido Servicio de Impuestos Internos, el 23 de noviembre de 2023, decía relación con el acceso y copia de última liquidación de remuneraciones, de su última evaluación funcionaria, de su hoja de vida funcionaria y de sus certificados de títulos profesionales de don Cristian Soto Torres (Grandes Contribuyentes).

Señala que su representada a través de la Resolución Exenta Nro. 0025766, de 22 de diciembre de 2023, respondió declarando la denegación de la información requerida con facilitación, indicando, en primer lugar, en cuanto a los títulos de postgrados requeridos, se comunica que, revisados los registros institucionales, en la referida carpeta del funcionario consultado no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QNDPXKGRGY

existen archivos de títulos de postgrados, por consiguiente, considerando que no resulta posible entregar información que no tiene disponible el Servicio, por lo que, corresponde declarar su inexistencia. Respecto a la última liquidación de remuneraciones, la última evaluación funcionaria y de la hoja de vida funcionaria de Cristian Soto Torres, que, revisados los registros institucionales, el Servicio se encuentra impedido de acceder a la entrega de dichos documentos, puesto que se vulneraría el derecho a la privacidad del funcionario, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la Republica, así como también los derechos de carácter comercial y económicos, conforme con las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.285. Asimismo, indica que en relación a los certificados de títulos profesionales mencionados, afirma que se señaló que, a pesar de estar disponible en los registros del Servicio las copias de los títulos profesionales de Contador Auditor y Abogado del funcionario, no es posible entregar la información solicitada, por cuanto, ello vulneraría el derecho a la privacidad y de los datos personales.

Menciona que, ante esta respuesta, el 26 de diciembre de 2023 la solicitante dedujo amparo de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia. En su traslado el Servicio contestó manteniendo su postura y fundamentos. Sostiene que con fecha 26 de junio de 2024, el Consejo en el referido amparo, acogió totalmente el mismo y dispuesto la entrega de los documentos ya individualizados.

Hace presente que el Consejo para la transparencia notificó al funcionario, quien, mediante correo electrónico de 31 de mayo de 2024, hizo llegar sus descargos, reiterando las mismas alegaciones sostenidas por el Servicio de Impuestos Internos, reclamado en orden a que concurren las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia.

Seguidamente, invoca las consideraciones que estima para denegar la información que se ordenó entregar ya que esta se encuentra protegida por las causales de reserva previstas en los numerales 2 y 5, del artículo 21, de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, de 1.999de ley de protección de datos de carácter personal.

En primer lugar, refiere sobre el contenido de la información que se



ordena entregar, mencionando que la hoja funcionaria es un documento regulado por el Estatuto Administrativo y el Reglamento General de Calificaciones. Explica que la hoja de vida de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos señala sus antecedentes personales, las anotaciones de mérito y demérito que disponga el jefe directo del funcionario, sanciones administrativas y los antecedentes de los periodos de calificación del funcionario. Destaca que el instrumento de calificación no solo dará cuenta del cumplimiento de tareas o el desempeño de su trabajo, si no que aborda otras dimensiones del comportamiento funcionario, como son aquellos relativos a las relaciones interpersonales. En cuanto a la liquidación de remuneración, indica que corresponde al documento que proporciona un desglose detallado de la remuneración total de un funcionario durante un periodo mensual, en el cual se indican el monto de su remuneración bruta, tributable y liquida, como asimismo contiene el detalle de los descuentos obligatorios y voluntarios que se efectúen

Invoca la causal prevista en el artículo 21 n° 2, de la Ley N° 20.285., en relación con la privacidad de los funcionarios públicos, aseverando que la protección de la información privada no solo se encuentra reconocida en nuestra Constitución, sino que también en los diversos tratados internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos.

Relata que, si el Consejo hubiera aplicado correctamente las causales de reserva invocadas, hubiera resuelto rechazar el amparo, toda vez que, la información solicitada en concreto se encuentra dentro del ámbito de la privacidad del funcionario interesado. Agrega que sin perjuicio que la hoja de vida funcionaria es un documento en el que se registra, en forma cronológica, el comportamiento y desempeño profesional de cada miembro del Servicio de Impuestos Internos, a través de notas de mérito, demérito o sumarios administrativos, sea que estos últimos hayan o no concluido con una sanción; efectivamente también da cuenta de hechos que no solo dicen relación con el desempeño funcionario, sino que, también puede contener registro, de eventos relativos a sus relaciones personales laborales, acontecimientos o conductas que, a juicio de esta parte se encuentran dentro de la esfera de su privacidad.

Destaca que, en la calificación de desempeño, no solo se registran



hitos estrictamente relacionados con el cumplimiento de las tareas del funcionario, sino que también con su “comportamiento” lo que, implica que, muchas veces se han efectuado juicios de valor relacionados con sus cualidades personales, capacidades y habilidades. Respecto a la entrega de la liquidación del crédito, manifiesta que el Consejo otorgó la entrega con reservas, pero esto no permite salvaguardar los datos económicos personales del funcionario, consistentes, por ejemplo, en los montos de descuentos que se efectúan a la renta bruta del funcionario, los que pueden desprenderse con una simple operación matemática, restando del monto bruto de la remuneración, el monto líquido.

Hace presente que mediante la Resolución Exenta N° 500, de 9 de diciembre de 2022, del Consejo para la Transparencia, a través de la cual se regula la obligación de publicar la remuneración de los funcionarios públicas, se precisa que la información a publicar es única y exclusivamente aquella denominada: “remuneración bruta mensualizada” y no la “liquidación de remuneraciones”.

Luego, alega la inexistencia de interés público en el caso de autos, indicando que la prueba de esta consiste en un proceso de ponderación entre el beneficio que reporta el dar a conocer la información solicitada versus el daño que su divulgación generaría en los derechos de las personas.

Por último, invoca la causal prevista en el artículo 21 N° 5, de la Ley N° 20.285, en relación con la Ley N° 19.628.- respecto a la información que se ha ordenado entregar. Insiste que la información solicitada corresponde a información que se encuentra dentro de la esfera de privacidad -conforme a lo que ha sido extensamente desarrollado en el acápite anterior- en virtud de las normas establecidas en el artículo 4°, 7° y el inciso primero, del artículo 9°, de la Ley N°19.628, antes señalados, este Servicio se encuentra impedido de hacer entrega de la información solicitada.

Segundo: Que, informa por el Consejo para la Transparencia, su Director General y representante legal, David Ibaceta Medina, solicitando que el reclamo sea rechazado en todas sus partes.

Luego de exponer los antecedentes de hecho que originaron el presente reclamo, precisa en cuanto al fondo de la acción, que la Decisión



de Amparo Rol C13580-23, adoptada por el Consejo para la Transparencia se ajusta a derecho y al sentido y espíritu del texto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que el Reclamo de Ilegalidad debe ser rechazado al no haberse incurrido en ninguna ilegalidad.

Alega que el Servicio de Impuestos Internos invocó en su reclamo de ilegalidad un nuevo argumento que no formó parte del debate en el procedimiento administrativo, por lo que su invocación extemporánea infringe el principio de congruencia procesal. Menciona que la requerida afirmó que de acuerdo a Ley de Transparencia la que en su artículo 7° señala, de forma específica, ciertas materias que deberán ser consideradas públicas y someterse al régimen de “TRANSPARENCIA ACTIVA”, entre las cuales, se encuentra *“La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondiente remuneraciones”* . Indica que el Consejo no pudo pronunciarse sobre el nuevo argumento que ahora alega la entidad edilicia y que, por lo tanto, ha precluido el derecho de la reclamante a alegar ex post el argumento antes expuesto.

Arguye que la información cuya publicidad se controvierte es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución y los artículos 5°, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia. Precisa que el año 2005, con la promulgación de la Ley N° 20.050, Ley de Reforma Constitucional, se incorporó el nuevo artículo 8° de la Constitución Política, esto es, el principio de publicidad.

Enfatiza que, si la información obra en poder de un organismo de la Administración Pública es, en principio, pública; y, para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida, como exige el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución. En consecuencia, la carga de la prueba del secreto le corresponde a quien lo invoca, esto es, al órgano reclamante en este caso.

Hace presente que lo pedido dice relación con los antecedentes laborales de un funcionario público, en particular, copia de su última liquidación de remuneraciones; su última evaluación funcionaria y su hoja de vida funcionaria, lo que constituye indudablemente información de naturaleza pública, en la medida que obra en poder del órgano, y que ha



sido elaborada y pagada con recursos públicos en el ejercicio de sus funciones públicas.

En cuanto al acceso a la información del personal, sus remuneraciones y otros, refiere que se debe considerar que, al momento de ponderar eventuales causales de reserva, se debe favorecer el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

Reitera que a través de Transparencia Activa no se proporciona aquello que fue requerido, y tratándose de información que obra en poder del SII, no concurriendo causales de reserva a su respecto, corresponde que sea entregada al solicitante en forma íntegra.

Más adelante, alega que el Servicio de Impuestos Internos carece de legitimación para efectuar alegaciones que importen invocar la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, bajo el argumento de que la entrega de la información afectaría los derechos de un tercero, no pudiendo alzarse como agente oficioso de éste, menos aun cuando el mismo ha optado por no reclamar de ilegalidad en defensa o protección de sus derechos, renunciando tácitamente a la causal de reserva ya indicada.

Manifiesta que la publicidad de la información requerida no afecta el derecho a la vida privada del tercero involucrado, por cuanto el amparo fue acogido ordenando tarjar todos sus datos personales y sensibles, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 2° letras f) y g) y 4° de la Ley N° 19.628, en relación con las causales de reserva del artículo 21 n° 2 y 5 de la Ley de Transparencia. Enfatiza que no puede existir afectación de los derechos a la vida privada del funcionario consultado, por dar a conocer información que acredita la calidad de su desempeño, y su respectiva carrera funcionaria en la institución, razón por la cual no concurren las causales de reserva ya citadas.

Por último, menciona que existe interés público en acceder a la información cuya publicidad se ordenó por el Consejo, propiciando el control social de la actuación de un órgano de la administración del estado,



respecto de sus funcionarios. Señala que atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño, lo que se ve reflejado en la información cuya entrega se solicita.

Tercero: Que se confirió traslado al tercero interesado, quien no presentó descargo alguno.

Cuarto: Que corresponde, entonces, determinar si la reclamada al acoger la Decisión de Amparo N° C13580-23, adoptada el 24 de junio de 2024, y disponer la entrega de la información solicitada por doña Haydee Cifuentes Cifuentes, ha incurrido en la ilegalidad que se ha denunciado por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Quinto: Que, en primer lugar, resulta menester consignar que la Constitución Política de la República señala, en su artículo 8°, que “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

También la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 12, asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información, en que la publicidad es la regla y el secreto la excepción, obligando a dar conocimiento de sus actos decisorios a todos los órganos del Estado, en sus contenidos y fundamentos, obrando con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.

No obstante, lo anotado, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, tienen excepciones, las que se encuentran contempladas en forma explícita y taxativa en la Constitución, y dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. De manera, que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

Sexto: Que, por su parte, la Ley N°20.285, de Acceso a la



Información Pública en su artículo 3°, dispone que la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.

En su artículo 4° inciso segundo, previene que “el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley”.

En su artículo 5°, preceptúa: “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

Por su parte, en el artículo 10, se establece: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que contenga, salvo las excepciones legales.”

En el artículo 15, de la ley en comento, se dispone: “Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha



información, con lo cual se entenderá Administración ha cumplido con su obligación de informar.”

Y en su artículo 21, señala, que las únicas causales de secreto o reserva por las que se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información son, entre ellas: “1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: (...) c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. (...) 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. (...) 5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo con las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

A su vez, el artículo 33, establece las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, disponiendo que corresponde a esta corporación, resolver sobre los reclamos por denegación de acceso a la información, y debido a ello, conocer y decidir sobre la procedencia de entregar determinada información en poder de los órganos de la administración, en alguna de las formas que se precisan en esta ley.

Séptimo: Que la normativa preceptuada en la ley N° 20.285, establece como regla general la publicidad y acceso a la información pública, siendo la excepción, aquellas que bajo una ley de quórum calificado la restrinja, cuando pueda verse afectado el cumplimiento de las funciones de los órganos estatales, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Octavo: Que, en la Decisión de Amparo rol C13580-23, que se recurre, en lo pertinente, se resolvió: “El consejo para la transparencia, en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 24 y siguientes y 33 letra b) de la ley de transparencia, y por la unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:

I.-Acoger el amparo deducido por doña Haydee Cifuentes Cifuentes, en



contra del Servicio de Impuestos Internos.

II.- Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente; a) Entregue a la reclamante: “Acerca de Cristian Soto Torres (Grandes Contribuyentes): 1.- Copia de su última liquidación de remuneraciones 2.- Copia de su última evaluación funcionaria 3.- Copia de su hoja de vida funcionaria. Lo anterior, previa reserva o censura de toda aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados los funcionarios, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que allí conste. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros...

Noveno: Que, el artículo 28 de la Ley N° 20.285, dispone, en contra de las resoluciones del Consejo para la Transparencia, un medio de impugnación, a través del reclamo de ilegalidad, el que como su nombre lo indica, tiene como objeto revisar si ellas se ajustan a la normativa legal que regula las actuaciones de dicho Consejo, y no para enmendarlas.

Décimo: Que, consecuente, con lo anterior, y como se ha dicho, siendo la publicidad un principio constitucional de orden general, recogido en las normas contenidas en la Ley N° 20.285, la que consagra el derecho fundamental del acceso a la información, a nivel de derecho interno, estatuyendo el principio de la transparencia de la función pública; la excepción a dicho principio, constituye una carga que corresponde acreditar a quien la alega, correspondiendo conocer a esta Corte de la presente impugnación.

Undécimo: Que la recurrente, alega, entonces, en síntesis, que no le resulta posible atender a la entrega de la información solicitada, argumentando, que la misma no reviste la calidad de pública, ya que se trataría de información personal del contribuyente.

Al respecto, cabe señalar, que la información que se ordena entregar acerca de Cristian Soto Torres (Grandes Contribuyentes), corresponde a: 1.- Copia de su última liquidación de remuneraciones 2.- Copia de su última evaluación funcionaria 3.- Copia de su hoja de vida funcionaria. Lo



anterior, previa reserva o censura de todos aquellos datos personales de contexto, tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, que individualiza la decisión de amparo reclamada.

Debido a lo dicho, resulta dable establecer que, a su respecto aplica el artículo 28 de la Ley de Transparencia, el que impide reclamar ante la Corte de Apelaciones de aquellas resoluciones del Consejo para la Transparencia que otorguen acceso a la información, a los órganos de la Administración del Estado, que la hubieren denegado fundados en la causal del número 1º comento.

De esta forma, lo anterior, es suficiente para concluir que el reclamo del Servicio de Impuestos Internos carece de legitimación activa, debiendo desecharse la causal de reserva invocada.

Duodécimo: Que, por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos insiste en que la documentación, podría contener datos personales de terceros, sin embargo, no explicitó, ni demostró, cómo se afectarían tales derechos, en conformidad a lo estatuido en el número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, norma que establece la justificación de la procedencia de esta causal de reserva.

Sin perjuicio de lo anterior, la Decisión de Amparo recurrida, en su parte resolutive, románico II, literal a) párrafo penúltimo, considerando dicha argumentación de la Agencia, ordena: “Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto eventualmente contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUT, entre otros.”

Cabe, agregar, que el principio de divisibilidad, contenido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, permite la reserva de los datos sensibles contenidos en la documentación que se ordena entregar, lo que refuerza la ausencia de ilegalidad en la decisión recurrida.

Decimotercero: Que, de lo relacionado, el presente reclamo de ilegalidad debe ser desestimado, por resultar acorde con el sustento fáctico y normativo aplicable, no vislumbrándose una ilegalidad en su actuar, toda vez, que el reclamante fundamenta su arbitrio en una interpretación particular de la normativa que invoca, contrastándola con la sustentada por



el Consejo, lo que no alcanza para configurar la contravención a la legalidad que se reprocha.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 20.285, **se rechaza sin costas**, el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos en contra la Decisión de Amparo del Consejo para la Transparencia, N° C13580-23, adoptada el 24 de junio de 2024.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Rol N° 483-2024. CA- ilegalidad.

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago,** presidida por la ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la ministra señora Carolina Brangi Zunino y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QNDPXRKGRCY

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maritza Elena Villadangos F., Carolina S. Brengi Z. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QNDPXRKGRCY